

La paz, la guerra y los negocios: Un análisis desde el realismo político

Santos Alonso
Beltrán Beltrán

Polítólogo
Administrador Público
Ingeniero Industrial
Magíster en
Estudios Políticos
Candidato a Doctor
en Estudios Políticos
y Relaciones
Internacionales

La paz es, por supuesto, un derecho que debería garantizarse a todos los ciudadanos, y su búsqueda, un deber de todos los gobiernos. La paz es la condición social en la que los individuos pueden desarrollarse de manera integral; en la que el crecimiento económico reporta mejores condiciones de vida para todos, mediante la resolución de las necesidades y deseos de la sociedad a través del uso racional de los recursos a disposición; en la que la política se convierte en el espacio civilizado de confrontación de las tendencias ideológicas sobre el destino de los recursos públicos y la participación de todos en la administración de los asuntos comunes; la paz es la condición social en la que la vida humana obtiene el máximo grado de validez en una atmósfera de respeto, solidaridad y tolerancia activa de las diferencias. De manera tal que resultaría absolutamente descabellado oponerse a la búsqueda de la paz, más en una sociedad como la colombiana que ha vendido soportando la más cruenta violencia de un conflicto bélico prolongado y degradado, en el que millones de colombianos se han visto afectados de múltiples formas, ya por el asesinato de sus seres queridos, por el desplazamiento forzado, por la perdida de sus bienes y enseres o por el señalamiento y el ostracismo político al que han sido



En septiembre de 1987, las FARC, el ELN, el M-19, el EPL, el PRT y el Movimiento Quintín Lame crearon la Coordinadora Nacional Guerrillera 'Simón Bolívar', segundo intento por unificar las organizaciones guerrilleras y proyectar el proceso de paz. La nueva estructura, sin embargo, no logró sus objetivos. *Imagen de: <http://www.elpais.com.co/elpais/infografias/cronologiapaz/index.html>*

condenados; en fin, por las consecuencias nefasta de la guerra, que sufren de manera mas descarnada las clases populares, en ultimas los miembros de los cuerpos armados, ejército y guerrillas, y tambien los integrantes del contexto social donde se desarrollan las acciones de guerra, la periferia de las grandes ciudades, la Colombia rural en la que se mueven los actores armados, las zonas de frontera agrícola donde campean la pobreza, el descuido estatal y los cultivos ilícitos. La paz debería significar para estos colombianos no sólo el cese de la violencia, sino la transformación real de sus condiciones materiales de existencia.

Pero la paz puede percibirse tambien como el contexto social positivo en el que se pueden desenvolver, sin contratiempos, los negocios, las cuantiosas inversiones de capital en la explotación agropecuaria y minero-energética y el disfrute de la propiedad sin término por parte de los poseedores de capital. La paz, en este sentido, reduce de manera real los costos derivados de la incertidumbre, un sobrecosto que obliga al gran capital a realizar provisiones extras de dinero para cubrir los posibles atentados contra la infraestructura que debe crear, a reducir la amenaza de violencia que pende sobre la cabeza de los que, en una sociedad tan desigual como la nuestra, quieren hacer gala de la ostentación y el derroche en la propiedad y el consumo. La paz es, en este sentido, tanto una condición para la inversión como un garante del aumento de las ganancias del capital. En una sociedad donde la

expansión económica esta cifrada en la explotación primaria de recursos por parte de grandes inversionistas privados, en espacios geográficos donde el conflicto armado se recrudece, sellar un acuerdo de paz es la mejor manera de garantizar la seguridad de la inversión y la ganancia, y ese es el caso de Colombia.

La guerra interna y las locomotoras del desarrollo: Títulos mineros, explotación petrolera y violencia armada

La relación entre economía y guerra irregular va más allá del análisis económico que liga la captura de rentas ilegales con el fortalecimiento de los grupos insurgentes. Esta posición despolitiza las confrontaciones armadas internas reduciéndolas simplemente a una acción de bandidaje adelantada por grupos armados ilegales, que, ante una dinámica económica de fácil extorsión –basada en la explotación de productos primarios, metales preciosos o combustibles, en un Estado sin capacidad de imponerse en el territorio y con una población dispersa, alejada de los centros de poder y con bajo nivel de cohesión social– se convierten en mafias que capturan la producción local y se proyectan a la influencia nacional para satisfacer su afán de acumulación ilegal. La despolitización se concreta con la denominación de estas agrupaciones como simples grupos terroristas, mientras se les cercena su carácter político como representantes de dinámicas sociales de resistencia en lo territorios, y se les reduce a agrupaciones alejadas del sentir popular y a simples instrumentos de cabecillas bien posicionados en el disfrute de las rentas ilegales, que usan la violencia para amedrentar a la población, alejar a las autoridades y neutralizar a sus enemigos en el negocio ilegal.

En Colombia, esta orientación analítica ha hecho carrera y el análisis político del conflicto armado ha sido desplazado por la medición económica de las rentas de los ilegales y la estimación de las ganancias dejadas de percibir por los inversionistas privados en las regiones. La geo-referenciación desarrollada por estos análisis descubre verdades de Perogrullo: que la guerra interna se intensifica en los territorios donde las economías ilegales tienen presencia, donde se proyectan las grandes inversiones en obras de infraestructura o de explotación minero-energética, o donde el gran capital ubica la mirada para generar dinámicas de desarrollo montadas sobre la gran explotación agropecuaria. La agudeza del análisis cae pues en el lugar

común de señalar que para que una guerra irregular se desarrolle es necesario que existan recursos cuantiosos y una presencia institucional corrupta, débil o, por lo menos, inexistente. La conclusión del análisis termina obviando la dinámica más importante, a saber, que la conflictividad social derivada de las economías de diáspora se politiza ante un Estado que más que ser el garante de los derechos de la poblaciones vulneradas, se convierte en agente de los intereses de las grandes compañías de explotación, en el cómplice local de las mafias que secuestran el poder político y en la tropa de ocupación para frenar los reclamos de las comunidades afectadas.

Nuevamente es Colombia el ejemplo por antonomasia de esta situación: la complejidad territorial del país, su relieve abrupto que plantea una difícil conexión interna, la construcción de territorialidades en donde la ausencia estatal ha generado para la población la necesidad de organizarse de manera independiente a las lógicas emanadas desde el centro –excluyentes y violentas– y, por supuesto, la potencialidad de riqueza económica que el territorio es capaz de generar, ya por los cultivos ilícitos, la extracción de recursos naturales o la explotación agrícola, permitió el desarrollo de agrupaciones insurgentes que desde los años sesenta empezaron a disputar con el Estado la construcción de referentes políticos y la organización social en las regiones.

La respuesta violenta del Estado a estas organizaciones y la construcción de tejido social alrededor de ellas, por la inmigración campesina a las regiones de dominio insurgente, solo recrudeció la guerra, la prolongó y generó la degradación del conflicto armado por todos los actores involucrados. En este momento las perspectivas de crecimiento económico están atadas, en esas regiones, al desarrollo de proyectos de extracción minera y petrolera, a la explotación de metales conflictivos y a la generación de grandes proyectos de desarrollo agrícola: alcanzar la paz se convierte en una necesidad para aclimatar las inversiones, para reducir los riesgos derivados de la conflictividad social y para con ello generar los puntos adicionales de crecimiento que se han dejado de percibir, pero que no garantizan la redistribución del ingreso y, por ello, tampoco el desarrollo con justicia social.

Una posición de izquierda debe insistir en que la llave de la paz no está en manos sólo de los contendientes, sino que descansa de manera real en la sociedad victimizada por el terrorismo de Estado y hastiada de la explotación económica, la exclusión política y la dominación internacional.

UP

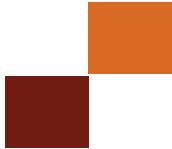
Unión Patriótica: Movimiento político surgido en 1985 a raíz de las Acuerdos de La Uribe con las FARC. Sería desde su creación blanco del militarismo, que practicó un genocidio político contra ella.

Imagen: [http://es.wikipedia.org/wiki/Unión_Patriótica_\(Colombia\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Unión_Patriótica_(Colombia))

La paz y la guerra: ¿Una cuestión de costos?

En repetidas ocasiones se ha afirmado por algunos analistas, y por funcionarios del mismo gobierno, que la guerra interna que vive el país ha causado un retraso en el crecimiento económico. Apuntan los analistas económicos que se podría generar un alza de dos a tres puntos porcentuales en la cifra de crecimiento de la economía nacional, pero que los costos asociados a la violencia inhiben el desenvolvimiento adecuado de la economía: el riesgo de desarrollar inversiones en las regiones aquejadas por el conflicto, los recursos destinados a la guerra, la destrucción de infraestructura por los alzados en armas y, en general, la incertidumbre para el capital inversionista, causarían este rezago en el crecimiento. Así, una sociedad en paz sería un ambiente provechoso para la inversión extranjera y, con ello, para el crecimiento de la economía. Sin embargo, no es claro que el crecimiento económico derive de manera fácil en equidad social, y tal vez estos economistas sigan pensando en que la teoría neoliberal del goteo beneficiará por añadidura a los más pobres: la riqueza rebosante de los poseedores de capital irrigará las clases populares con beneficios como empleo e ingreso.

El establecimiento está, pues, dispuesto a pagar los costos para obtener una paz que permita el crecimiento económico. En la mentalidad del tendero, las sumas y las restas le plantean un balance positivo: tendrán que incurrir en algunos costos fiscales, tendrán que modificar levemente el ritmo de las inversiones, pero —a largo plazo— podrán acelerar el ritmo de las ganancias. En este momento más que un presidente comprometido con la paz, lo que tenemos es a un establecimiento hastiado de los costos económicos de la guerra, un establecimiento que “se metió la mano al bolsillo” para garantizar el financiamiento de diez años de la guerra



En el proceso de paz que se inicia, la sociedad colombiana debe tener claro que la invitación del establecimiento a encontrar salidas al conflicto armado busca en buena medida construir un ambiente de seguridad política y jurídica para las inversiones: la guerra interna es un impuesto muy alto que las clases dominantes no están dispuestas a seguir pagando.

más cruenta y costosa de la historia del país, y que no cosecho lo frutos que esperaba. Ahora, ante el *boom* minero, ante la posibilidad de explotación masiva del agro, ante la perspectiva de inserción internacional mediante los TLC, los factores reales de poder presionan para que el gobierno de turno vuelva a la mesa de negociación, aunque no están dispuestos a permitir los ruidos de una sociedad civil que quiera ampliar la perspectiva de la negociación, que la saque del simple objetivo de la desmovilización de los alzados en armas y la proyecte hacia una transformación de la economía, del ejercicio del poder político, de la organización del territorio, del sentido de las relaciones internacionales: las cortas miras del establecimiento soportarían los costos de la negociación, pero siempre que estos

sean limitados, tanto en el tiempo como en la modificación de las estructuras de poder; si se “extralimitan” se levantarán de la negociación, inventando cualquier excusa, y luego lo hará el gobierno para dar la impresión de que son los alzados en armas los que siempre boicotean el proceso.

En el proceso de paz que se inicia, la sociedad colombiana debe tener claro que la invitación del establecimiento a encontrar salidas al conflicto armado busca en buena medida construir un ambiente de seguridad política y jurídica para las inversiones: la guerra interna es un impuesto muy alto que las clases dominantes no están dispuestas a seguir pagando. La posición de una sociedad consciente de la potencialidad transformadora de los acercamientos de paz, debe forzar a la ampliación de la mesa de diálogo y a la inclusión de sectores sociales, mas allá de los clásicos factores de poder –el gobierno, los gremios económicos, los militares e, incluso, la propia guerrilla–; una posición de izquierda debe insistir en que la llave de la paz no está en manos sólo de los contendientes, sino que descansa de manera real en la sociedad victimizada por el terrorismo de Estado y hastiada de la explotación económica, la exclusión política y la dominación internacional.